

Radicalismo opositor

JOSÉ ANTONIO CRESPO

Es ampliamente reconocido que la transición política mexicana (sea cual fuere su desenlace), ha sido muy peculiar; aunque muchas de las constantes encontradas en otros procesos de transición aparecen también aquí (crisis económica, división de las élites, movilización ciudadana, presiones internacionales, etcétera), no puede ocultarse que hay varios aspectos muy distintos de la pauta típica de una transición del autoritarismo a la democracia. Aquí impera una incertidumbre más marcada que la encontrada en otras partes, sobre el desenlace y los ritmos del cambio; hace años que se habla de la democratización mexicana sin que ésta termine por concretarse con claridad; los movimientos hacia ella son muy lentos y erráticos; hay desacuerdo sobre qué tanto se ha avanzado, y qué tan importantes son los sucesos que nos acercan a la democracia, hay diversas posturas acerca de qué tipo de régimen fue el priísta, y sobre la ubicación exacta en que nos encontramos; finalmente, no hay acuerdo sobre el momento en que empezó la transición (lo cual es muy claro en la mayoría de las otras experiencias) y menos lo será determinar en qué punto habremos cruzado el umbral que nos separa de una auténtica democracia. Esto no es algo común; en una típica transición del autoritarismo a la democracia, hay perfecto acuerdo sobre el carácter autoritario del Antiguo Régimen y, una vez que se han dado los pasos fundamentales hacia la democracia (que no suelen llevar mucho tiempo) hay también un amplio consenso sobre el momento en que ésta ha sido inaugurada. Pero no aquí; en México hemos partido de un régimen autoritario –pero sofisticado, institucionalizado y relativamente flexible– que además hace décadas que emprendió un camino de apertura limitada, pero constante y sistemática, por lo cual gradualmente se introdujeron algunos elementos que parecen o incluso operan de manera democrática, sin que ello hubiera supuesto un cambio esencial del régimen priísta. Eso, en sí mismo, genera confusión y desacuerdo sobre el propio carácter del régimen priísta, y sobre todo, con respecto al momento en que habremos cruzado la frontera democrática; aunque casi todos concuerdan en que estamos cerca de ese lindero democrático, algunos piensan que estamos ubicados todavía en el campo autoritario; otros más piensan que estamos cruzando el umbral, si bien no hemos salido de él, y finalmente muchos aseguran que el autoritarismo ha quedado atrás de manera inequívoca. Cada una de estas corrientes de opinión ofrecen sus pruebas, que de alguna forma tienen cierta validez, pero

no son concluyentes para ubicar con precisión en donde se encuentra el país en este borroso proceso.

Hay, sin embargo, una relación que se ha podido encontrar entre la percepción sobre el punto en que nos encontramos y la posición política; los opositores tienden a escatimar el avance democrático, pese a las evidencias en ese sentido, en tanto que los allegados al régimen suelen considerar cada paso, incluso el más insignificante, como prueba irrefutable, no sólo de que hemos transitado a la democracia, sino incluso de que ya arribamos a una genuina "normalidad democrática". Los opositores más radicales, en cambio, desconocen cualquier progreso por espectacular que sea, calificándolo como meramente cosmético, como los que tradicionalmente utilizó el régimen para darse un maquillaje democrático.

Desde mi perspectiva, en los últimos años hemos sido testigos de algunos eventos que sí nos permiten aceptar que se han dado avances significativos hacia la democracia, si bien no puede darse por un hecho el que hayamos cruzado el umbral por completo, y menos que el país viva una plena normalidad democrática; la reforma electoral de 1996, por ejemplo, quitó un elemento clave de la hegemonía priísta; el control de las autoridades electorales, lo que a su vez se traduce en la imposibilidad de revertir un resultado desfavorable para su partido. Y otro elemento esencial de la hegemonía priísta que ahora se ha perdido, es la mayoría absoluta de la Cámara Baja. Pero hay quienes piensan que ni siquiera esos dos sucesos son dignos de consideración en el avance democrático del país; asumimos que se trata de los elementos más radicales de la oposición. ¿Cuántos y quiénes son estos ciudadanos? Esto se ha indagado a través de un sondeo nacional (octubre de 1997). Los resultados básicos son los siguientes:

¿Cree usted que avanzó la democracia en México durante este año? (1997)						
	General %	PRI %	PAN %	PRD %	PVEM %	PT %
Si	67	80	67	60	38	59
No	33	20	33	40	61	61
Total	100	100	100	100	100	100

Una no pequeña tercera parte de los encuestados niegan cualquier avance democrático; obsérvese que la pregunta no afirma que ya hay democracia en México (lo que probablemente hubiera arrojado menos respuestas afirmativas) sino solamente si hubo avance democrático; de ahí que se infiera que quien respondió negativamente asuma una posición radical al respecto; probablemente exigen algo más drástico para admitir que se ha avanzado por ese camino. Al cruzar la respuesta contra la simpatía partidista, se confirma que la oposición presenta mayores reservas para aceptar el progreso democrático. Con todo, salvo en el caso de los simpatizantes del Verde Ecologista, la mayoría de los opositores reconocen un adelanto (los panistas, en mayor medida que los perredistas, como era previsible). Al cruzar esta pregunta con otras variables, encontramos que sin importar las variables, la mayoría acepta que se dieron pasos hacia la democracia en 1997, aunque, las proporciones varían de acuerdo con las categorías en cada variable. Al considerar la proporción de quienes sí aceptan un avance democrático en el país, se observa que en la zona metropolitana hay mayor suspicacia al respecto (58%) frente al Sureste del país (zona de gobernadores duros), en donde se admite el progreso en un 75%. Atendiendo al tipo de localidad, en las grandes ciudades hay mayor reticencia a aceptar la democratización del país (pese a su mayor exposición a los medios y mayor politización, factores que podrían generar una conclusión opuesta si no intervinieran las posiciones ideológicas), pues sólo el 60% respondió afirmativamente, frente a un 73% que así lo hizo en los pueblos. Al atender la escolaridad, no sorprende que los más recelosos sean los estudiantes de preparatoria, casi por definición la etapa más combativa y crítica en todo el ciclo escolar (6%) respecto de quienes tuvieron el privilegio de cursar un posgrado (72%). Cuando se considera la ocupación, son los profesionistas liberales quienes presentan mayor reticencia (64%) a diferencia de los dirigentes públicos, quienes en mayor medida aceptan el avance como real (90%). Finalmente, como es lógico suponer, la percepción económica influye en la disposición a aceptar la relativa democratización como un hecho; quienes piensan que las cosas han mejorado admiten en mayor proporción el adelanto democrático (78%), mientras que ven el panorama más oscuro, lo hacen en mucho menor medida (60%).

Así pues, la percepción de lo que ocurre en materia de cambio político está fuertemente influida por factores totalmente ajenos a la dinámica propia de la democratización. Pero el éxito de ésta, y sus posibilidades de consolidarse, dependen en buena medida de que la gran mayoría de los ciudadanos y actores reconozcan que la democracia ha llegado, desde luego, cuando eso suceda de manera inequívoca

Nota

1 "Cultura electoral y democratización en México", Movimiento Ciudadano por la Democracia, 1997.

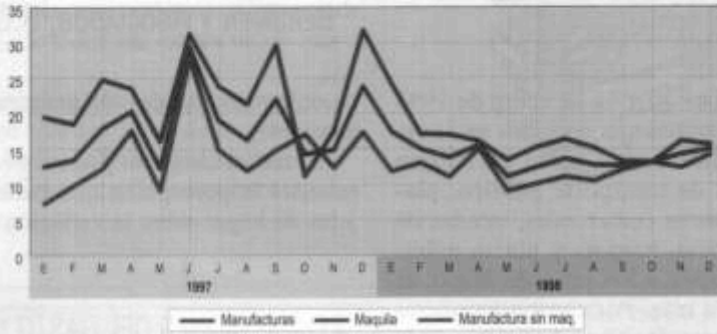
El autor es doctor en ciencia política, investigador del CIDE y colaborador del periódico Reforma.

INDICADORES

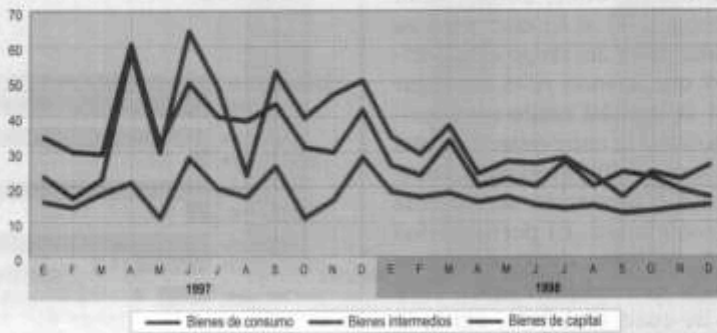
Economía nacional

Importaciones y exportaciones

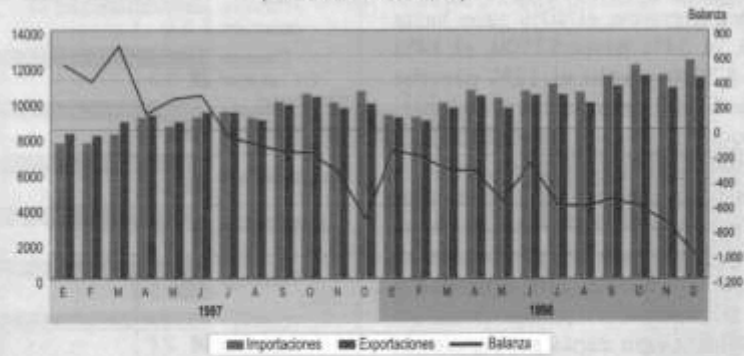
EXPORTACIONES MANUFACTURERAS
(VARIACIÓN ANUAL)



IMPORTACIONES POR TIPO DE BIEN ANUAL
(VARIACIÓN ANUAL)



BALANZA COMERCIAL
(MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: Capem, *Perspectivas económicas para México*, enero 1998.